

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Héctor Jaime Ortiz Cardona
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A
Litisconsortes necesarios por pasiva	Ministerio de Hacienda y Crédito Público OBP, Ministerio de Defensa, Municipio de Itagüí y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 002 Laboral del Cto. de Itagüí
RADICADO	05360 3105 <b>002 2022 00069</b> 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 223 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Retroactiva garantía de pensión mínima – intereses moratorios
DECISIÓN	Confirma

Hoy, **veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la **AFP Porvenir S.A.**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Itagüí, dentro del proceso que le promoviera **Héctor Jaime Ortiz Cardona**, al que fueron vinculados como listisconsortes necesarios por pasiva el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales-**, el **Ministerio de Defensa Nacional**, el **Municipio de Itagüí** y

**Colpensiones.** Radicado único nacional 05360 3105 **002 2022 00069** 01.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 027**, que se plasma a continuación.

### **Antecedentes**

Las pretensiones de la demanda se orientan a que se disponga que, debido a la negligencia en el trámite de reconocimiento de la garantía de pensión mínima, le asiste al actor el derecho a recibir dicha prestación a partir del 11 de febrero de 2019. **En consecuencia, solicita el otorgamiento del retroactivo generado desde dicha calenda hasta el 31 de agosto de 2021, así como el pago de los intereses moratorios.** Ruega también condena en costas.

En sustento de ello, considerando lo definido en primera instancia, y lo que es objeto de análisis dado el recurso de apelación formulado, se sostiene que, al cumplir 62 años, el 11 de febrero de 2019, y acumular 1.628 semanas, se dirigió a Porvenir S.A., el 12 de febrero de 2019, para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. La entidad le respondió que no podía procesar la reclamación debido a su afiliación doble, y a un error en su nombre, indicándole que debía obtener certificado para bono pensional del Municipio de Itagüí, ya que el emitido por el Ministerio de Defensa no era suficiente. Que presentó varias reclamaciones ante Colpensiones con el fin de que le autorizaran su traslado, basado en la sentencia SU 062. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2019, se le expresó que no era procedente y debía permanecer en Porvenir S.A.. El 12 de noviembre de 2019, insistió en el

reconocimiento de su pensión ante esta administradora, pero le dijeron que no se le podía generar el formulario requerido debido a que persistía el error en su identificación, sugiriéndole que esperara 2 meses. Debido a la imposibilidad de obtener el formato, promovió acción de tutela, conocida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí, en la que se le protegieron sus derechos, concediéndole a Porvenir S.A. un plazo de 48 horas para resolver la multivinculación y la petición de la prestación, sin exigir requisitos no ordenados por la Ley. Ante el incumplimiento de la decisión, formuló incidente de desacato, por lo cual, Porvenir S.A. le indicó, el 12 de diciembre de 2019, que debía radicar una serie de documentos para cumplir con la orden, lo cual obedeció. Sin embargo, el 23 de octubre de 2020, la entidad le hizo exigencias adicionales y le avisó que debía esperar la aprobación del Ministerio. Asevera que el fondo le pidió en varias ocasiones que completara el formulario de solicitud de pensión y al dirigirse, el 29 de marzo de 2021, a consultar el estado de su trámite, le entregaron una constancia que indicaba que estaba en proceso. Ante la falta de respuesta, el 12 de mayo del mismo año instauró nueva acción de tutela, decidida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí, que en providencia el 24 de ese mes y año, le ordenó a Porvenir S.A. resolviera de fondo. Ante el incumplimiento, instauró incidente de desacato, contactándolo la AFP el 3 de junio de 2021, para que volviera a completar un formulario. En comunicado del 8 de octubre de esta última anualidad, se le notificó **la aprobación de la garantía de pensión mínima**, la cual comenzaría a pagarse a partir de septiembre de ese año, siendo evidente la negligencia en la gestión al tardar **32 meses** para resolver.

Subsanados los requisitos exigidos, mediante **auto del 08 de abril de 2022 se admitió y se dio trámite a la acción**. Una vez notificada Porvenir S.A. procedió a dar respuesta, aceptando la afiliación del señor Ortiz Cardona a dicho fondo, acto que se produjo el 01 de marzo de 2000.

Asimismo, asiente sobre: la orden impartida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Itagüí; que el 23 de enero de 2020 se le exigió allegar documentación para darle cumplimiento a la sentencia de tutela y 09 de noviembre del mismo año, se le instó a firmar el comprobante de radicación de la pensión; que el 29 de marzo de 2021 se acercó a preguntar por el estado de su trámite; la sentencia emitida el 24 de mayo de 2021 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí y, la insistencia en el acatamiento de dicha orden mediante incidente de desacato. En lo que respecta a los restantes supuestos, no constan, no son ciertos o no son hechos. En su defensa, afirma que fue diligente y tramitó activamente la conformación de la historia laboral. Esta situación debía ser verificada para determinar la clase de prestación a la que podía acceder, ya que, a pesar de contar con las 1.150 semanas, era necesario confirmar si el capital existente en la cuenta era suficiente para financiar la prestación de vejez. Además, aclara que la obligación que le correspondía y que cumplió era la de ser intermediaria entre el afiliado y las entidades encargadas de reconocer y pagar el bono pensional. Sin embargo, estas no actuaron de manera acusiosa, generando reprocesos, lo cual dio lugar a que solo hasta agosto de 2021 se pudiera llevar a cabo el cálculo actuarial exigido por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para otorgar la garantía mínima. **Se opuso a las pretensiones** y formuló como excepción, previa, la de falta de integración del listis consorcio con Colpensiones, Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos Pensionales, Ministerio de Defensa y Municipio de Itagüí. Además, planteó **excepciones de fondo** que incluyen las de inexistencia de las obligaciones demandadas por ausencia de los presupuestos y requisitos legales, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, hecho exclusivo de un tercero, compensación, imposibilidad de reconocer intereses moratorios, cosa juzgada y la innominada o genérica.

Mediante proveído del 19 de enero de 2023, se admitió la respuesta de la AFP, y se ordenó la integración de contradictorio con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos Pensionales, Ministerio de Defensa, Colpensiones y Municipio de Itagüí, como litisconsortes necesarios por pasiva. Entidades que fueron notificadas y replicaron de la siguiente manera:

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público** resistió las pretensiones y manifestó que no le constan los hechos. En los fundamentos de defensa, señaló que el señor Héctor Ortiz se encuentra afiliado al RAIS desde el 31 de enero de 2000, solicitado Porvenir S.A., en calidad de representante de aquel, la emisión y redención del bono pensional, el 16 de marzo de 2021, a lo que se accedió con la Resolución 24868 del 22 de junio del mismo año, sin que exista obligación pendiente. El Ministerio de Defensa y Municipio de Itagüí, quienes eran contribuyentes del bono, informaron, el primero, el 17 de junio de 2021, que a través de la Resolución 4922 de la misma fecha, otorgó la cuota parte; y el segundo, el 5 de abril de 2021, que mediante el acto administrativo 70438 del 28 de julio de 2020, reconoció el título, efectuando el pago el 15 de julio de 2021. Según documentación presentada por Porvenir S.A., esta determinó que la fecha de inicio de la cancelación de la mesada sería el 1º de septiembre de 2021, sin derecho a retroactivo, sin que tal cartera tenga injerencia en ello, en tanto, la garantía de pensión mínima se concede con base en lo que la AFP establezca. Además, la verificación del cumplimiento de los requisitos recae únicamente en la administradora pensional, y por lo tanto, corresponde a este explicar el criterio para fijar el disfrute a partir del 1º de septiembre. Propuso **las excepciones** de: inexistencia de la obligación, ausencia de responsabilidad, responsabilidad exclusiva de la AFP, prescripción, buena fe y la genérica.

**Municipio de Itagüí**, admite solo lo relacionado con la sentencia de tutela emitida el 12 de mayo de 2021; respecto de los demás hechos, alega que no le constan. No obstante, señala que la AFP Porvenir S.A. envió solicitud, a través de oficio fechado el 19 de noviembre de 2018, para la expedición del bono pensional, y que la información requerida fue remitida el 22 del mismo mes y año. Posteriormente, se presentó una nueva reclamación por parte de la misma AFP, lo que llevó a la expedición de la Resolución 70438 del 28 de julio de 2020, en la que se reconoció y autorizó el pago de la cuota parte pensional, cuya cancelación se realizó el 18 de agosto de 2021, tras completarse el procedimiento por parte de todas las entidades contribuyentes y emisoras del bono, siendo este el momento en el que el Ministerio de Hacienda redimió el cupón principal. Argumenta que, según la información de la OBP, hubo una detención del título del actor debido a la falta de otorgamiento de la obligación por parte del Ministerio de Defensa a través de acto administrativo. **Se opuso a la prosperidad de las pretensiones** y formuló los **medios exceptivos** de: inexistencia de la obligación, falta de prueba de lo pedido, prescripción y la genérica.

**Colpensiones**, admite solo lo concerniente a las peticiones elevadas con el propósito de definir su estado de afiliación y la respuesta emitida el 30 de septiembre de 2019, en la que le puso en conocimiento que no era posible acceder al traslado en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, y que debía permanecer en Porvenir S.A.. Los restantes hechos no le constan. **rechazó las pretensiones** y exhibió las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, responsabilidad sui generis de las entidades de seguridad social, presunción de legalidad del acto administrativo, buena fe, imposibilidad de condena en costas, innominada y compensación.

En auto del 11 de abril de 2023, se dio por no contestada la demanda por parte del Ministerio de Defensa.

La primera instancia concluyó **con sentencia, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí**, en la que declaró que el señor Héctor Jaime Ortiz tiene derecho a recibir mesada en la modalidad de garantía mínima, a partir del 12 de abril de 2019. En consecuencia, condenó a Porvenir S.A., a reconocer y pagar, con cargo a sus propios recursos, la suma de **\$26.654.404,00, como retroactivo** causado hasta agosto de 2021, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicados desde 13 de agosto de 2019 y hasta que la obligación se cancele. Absolvió a las demás entidades convocadas e impuso costas a cargo de la vencida, con tasación del monto de las agencias en derecho a favor de la parte activa.

La falladora, después de examinar las disposiciones contenidas en los artículos 64, 65, 68 y 84 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 656 de 1994, la Ley 1955 de 2019, consideró que, si bien el reconocimiento de la garantía de la pensión mínima es responsabilidad de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, también lo es que, todo el proceso que desencadena esta decisión recae en la AFP, entidad que tiene la competencia para pedirle a los empleadores toda la documentación que haga falta para adelantar los trámites, por lo que de eludirse tal obligación, se debe proceder con la cancelación de la pensión provisional en favor del afiliado. Además, si la AFP no cumple con las responsabilidades que la ley le impone, se le obliga a asumir, con cargo a sus propios recursos, la prestación correspondiente, y así se debe proceder en este asunto, en tanto, el señor Héctor se enfrentó a dificultades al intentar formalizar su solicitud de pensión, y se vio obligado a acudir al Juez Constitucional en varias ocasiones para que la AFP respondiera a sus ruegos, incluyendo la definición de su régimen y la entrega del formulario

para la reclamación, adicional a que después de presentar la documentación, el fondo privado le informó que el reconocimiento y pago del bono pensional debían ser gestionados por los Ministerios de Hacienda, y Defensa Nacional, el Municipio de Itagüí y Colpensiones, lo cual da cuenta que la administradora solo comenzó a gestionarlo cuando este requirió la definición de su estado de afiliación y su pensión, lo que va en contra de las regulaciones sobre el tema que demandan a la AFP gestionar el título desde el momento de la vinculación del afiliado y a realizar un seguimiento trimestral de la emisión para garantizar que esté pagado en la cuenta de ahorro individual a la fecha de redención o, a más tardar, un mes después, de acuerdo con el Decreto 1748 de 1995. Sin embargo, se tardó 26 meses desde que el actor expresó su intención de que se definiera su estado pensional y se le comunicó que podía acceder a la prestación el 08 de octubre de 2021, lo cual evidencia la falta de diligencia por parte de Porvenir, por lo que le impuso la condena a las mesadas retroactivas, en la forma ya indicada, con el pago de intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al haberse demostrado el retraso, corriendo los mismos 4 meses después de elevada la solicitud, es decir, desde el 13 de agosto de 2019.

El **Recurso de apelación** fue oportunamente interpuesto por el **apoderado de Porvenir S.A.**, haciendo énfasis en que el proceso de otorgamiento de la garantía de pensión mínima no es automático y requiere de la colaboración tanto de los fondos como de las entidades involucradas, en este caso, el Municipio de Itagüí, el Ministerio de Defensa y Colpensiones, a fin de consolidar el bono pensional. Además, resaltó que la ayuda de los afiliados es esencial para consolidar la historia laboral. Arguyó que, a pesar de que la entidad llevó a cabo todos los trámites para el reconocimiento del bono, se presentaron problemas debido a requisitos y procedimientos que no se acataron correctamente por parte de los cuotapartistas, lo que dificultó la emisión del título, lográndose solo en el



2021. Insiste en que no fue negligente, ya que desde 2020 se enviaron correos a la OBP y obtuvieron respuesta indicando que no se admitía el título, lo que evidencia que las demoras estaban relacionadas con la falta de colaboración de las demás entidades.

Sostuvo que la garantía de pensión mínima no debe reconocerse desde el momento en que el demandante cumplió con los requisitos, ya que estas exigencias no estaban acreditadas para esa data. Por lo tanto, insta para que no se conceda el retroactivo, ni los intereses moratorios, insistiendo en la actuación diligente y de buena fe, de acuerdo con las normativas legales y directrices jurisprudenciales.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** ante esta instancia hizo uso **Colpensiones**, solicitando la confirmación de la decisión al no existir ningún tipo de obligación a su cargo.

**Demandante**, esgrime que el actuar negligente de Porvenir S.A. resultó en un disfrute tardío de la prestación, afectando sus derechos fundamentales al mínimo vital al reconocer y pagar la pensión a partir de octubre de 2021, 30 meses después de lo debido. Destaca las acciones que tuvo que emprender para que se valorara la procedencia de su prestación.

**Porvenir S.A.**, manifiesta que la decisión de primera instancia desconoció los requisitos para el reconocimiento de la garantía de pensión mínima y no tomó en cuenta que una vez acreditados estos, es decir, cuando se conformó el capital necesario y se obtuvo la aprobación por parte de OBP que permitiera la financiación, procedió con la concesión de dicha garantía. Destaca la importancia de presentar formalmente la solicitud con la documentación completa y se hace referencia a una sentencia de la Corte Suprema Sala Laboral que realiza una comparación sobre cómo se

financia la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), subrayando la necesidad de aportes propios de la Nación. Solicita se consideren las omisiones cometidas por el Ministerio de Defensa y el Municipio de Itagüí en el proceso administrativo para establecer el bono pensional, las cuales resultaron en demoras en la emisión y pago del mismo.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Teniendo en cuenta las inconformidades planteadas, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer si es dable reconocerle al actor el retroactivo pensional y los intereses moratorios, con cargo a los recursos de la AFP, tal y como lo determinó la a quo, o si por el contrario, la razón está de lado de Porvenir S.A., al indicar que no se puede predicar negligencia en su actuar.

Pues bien, el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 establece la garantía de pensión mínima de vejez, como medio para asegurar un ingreso a los afiliados al RAIS que no cumplen con los requisitos para pensionarse en los términos del canon 64 ibídem. Para acceder a este beneficio, los hombres deben acreditar 62 años y las mujeres 57, y en ambos eventos **aportes por 1.150 semanas**. La prestación equivale al salario mínimo legal mensual vigente y atiende básicamente al principio de solidaridad.

Así, al satisfacerse los presupuestos necesarios para la garantía de pensión mínima, es esencial verificar como se procede a su pago, aspecto que se encuentra expresamente regulado en el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado por el 2º del Decreto 142 de 2006, compilado en el

## Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, disponiendo el artículo 2.2.5.5.1:

*Mecanismos de pago de la pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual. Para efectos del presente capítulo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante resolución, y previa consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, las fórmulas para el cálculo del saldo de una cuenta individual suficiente para cubrir vitaliciamente una pensión mínima, consultando los precios de las pólizas de renta vitalicia vigentes en el mercado, el cual se denominará saldo de pensión mínima. Igualmente, establecerá las fórmulas para la proyección de saldos de que trata el inciso 3 y, en general, los demás cálculos indispensables para la aplicación del presente artículo.*

*En desarrollo del artículo 83 de la Ley 100 de 1993, cuando la AFP verifique, de acuerdo con los anteriores cálculos, que un afiliado que ha iniciado los trámites necesarios para obtener la pensión de vejez reúne los requisitos para pensionarse contenidos en el artículo 64 de la misma, pero el saldo en su cuenta individual es menor que el saldo requerido para una pensión mínima, incluido el valor del bono y/o título pensional, iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión con cargo a la cuenta de ahorro individual, previo reconocimiento de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del derecho a la garantía de pensión mínima, reconocimiento que se efectuará en un plazo no superior a cuatro (4) meses contados a partir del recibo de la solicitud.* (subrayado fuera del texto original)

De acuerdo con ello, se tiene que, para el reconocimiento de esta prestación, concurre en su causación no sólo el cumplimiento de la edad y densidad de semanas, sino también la expresión de voluntad del afiliado manifestada en la solicitud o reclamación de dicha garantía pensional. Además, es necesario que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgue la misma. Esta concesión debe entenderse como la concurrencia de la Nación con el aporte de los recursos necesarios para completar el capital requerido para la financiación. En estas gestiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la responsabilidad de llevar a cabo los trámites necesarios para atender las solicitudes prestacionales de sus afiliados, conforme lo prevé el artículo 83 de la Ley 100 de 1993. Este deber se regula detalladamente en los artículos 20 y 21 del Decreto 656 de 1994,

*"Por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administran fondos de pensiones" disponiendo el primero:*

***"Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.***

***Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán efectuar un seguimiento trimestral al trámite de su emisión.*** Para estos efectos, los afiliados deberán suministrar a las administradoras la información que sea necesaria para tramitar las solicitudes y que se encuentre a su alcance. En todo caso, las administradoras estarán facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales serán de obligatoria expedición por parte de los destinatarios.

*/.../*

***Las solicitudes de pago de bonos pensionales deberán ser presentadas por la administradora a la cual se haya formulado una solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por personas que hayan cumplido la edad establecida para obtener la garantía de pensión mínima del Estado. (...) La solicitud de pago de un bono para atender una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por cumplimiento de la edad para acceder a una pensión mínima deberá ser presentada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensión.***— resaltos fuera del texto-

Y el artículo 21:

*"Las administradoras que incumplan el plazo establecido para pronunciarse respecto de una solicitud de pensión deberán pagar, con cargo a la respectiva cuenta individual de ahorro, una pensión provisional en favor del afiliado, calculada tomando en consideración los mismos criterios establecidos para la determinación de la mesada pensional a través de retiros programados. Esta pensión comenzará a reconocerse mensualmente a partir del día quince (15) hábil contado desde el vencimiento del plazo señalado para pronunciarse y deberá pagarse hasta el momento en el cual se efectúe el correspondiente pronunciamiento.*

***Del mismo modo, cuando no existan recursos suficientes para atender el pago de una pensión por falta de presentación oportuna de las solicitudes de pago de bonos pensionales, de las solicitudes de pago de las garantías mínimas estatales o de las solicitudes de pago de las diferencias a cargo de las compañías aseguradoras, por razones***

***imputables a las administradoras, éstas deberán reconocer a los respectivos pensionados pensiones provisionales, con cargo a sus propios recursos.***

***En general, corresponderá a las administradoras asumir pensiones provisionales con cargo a sus propios recursos en todos aquellos casos en los cuales el afiliado no disponga de la totalidad de las sumas a que tendría derecho para atender su pensión por falta de cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones por parte de la administradora.***”- resaltos intencionales-

Normas de las que se desprende la obligación de las AFP de gestionar todo lo concerniente para la concesión de la garantía de pensión mínima, así como de realizar el pago provisional de mesadas, mientras se conceda por parte del Ministerio de Hacienda, bien con cargo a los recurso de la cuenta de ahorro individual del afiliado o al patrimonio propio de la AFP, en los casos en que exista negligencia por parte de esta en su deber de gestión, ello en tanto, dichas entidades prestan un servicio público esencial, ver sentencia SL2512-2021-

Sobre la interpretación del artículo 20, la jurisprudencia especializada en providencia SL1079-2023, indicó:

***”Se extrae de la norma en cita que la obligación de las administradoras de fondos de pensiones es de medio y no de resultado; no obstante, su deber de diligencia, conforme al diseño normativo como se anotó, es superlativo, al punto de responder aun por culpa leve; y es precisamente dicho estándar lo que lleva a que la falta de diligencia imponga en su cabeza la consecuencia de su actuar y, al estar reglada su actuación y el salirse de los parámetros en ella establecidos, comporta la consecuencia que la misma norma establece. Es menester que todas las administradoras de pensiones que integran el sistema pensional adecúen su actuar al marco normativo ajustando su gestión a los plazos establecidas en la ley y si bien el trámite de la garantía implica que el bono pensional se encuentre emitido, si evidencia la causación del derecho bajo la garantía estatal, debe requerir al ente gubernamental.*** (véase también la SL4320-2022 y SL5658-2021). Resaltos fuera del texto original.

Y en lo que respecta al deber de las administradoras en la consolidación de la historia laboral con el fin de concretar el llamado título de deuda pública, tal como lo establece el mismo precepto, este proceso debe

empezar *desde el momento en que se hace efectiva la afiliación*, concediéndoseles un término de 6 meses siguientes a la vinculación, para elevar la petición de emisión, además, del seguimiento que, frente al mismo, deben cumplir cada 3 meses (sentencias SL1069-2023, SL1079-2023, SL4320-2022, SL5658-2021, entre otras).

Supuesto que también se encuentra respaldado en lo establecido en el artículo 17 del Decreto 656 de 1994, el cual prevé que las AFP tienen la responsabilidad de obtener y mantener actualizada toda la información previsional de sus afiliados, de tal manera que estén en plena capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada uno de ellos cumple los requisitos para acceder a una pensión por vejez, a efectos de no dilatar el trámite de reconocimiento por causas que son atribuibles a su propia gestión.

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, cuando la administradora de pensiones privada verifique que el asegurado satisface los requisitos de edad y semanas de cotización para acceder a la garantía de pensión mínima, se considera que la prestación de vejez se causó y deberá reconocerla y pagarla inicialmente con los recursos de la cuenta de ahorro individual y, cuando ellos se agoten, con los dineros estatales, para lo cual debe adelantar las gestiones pertinentes ante la Nación, para obtener la garantía económica de solidaridad. Es importante destacar que este proceso no debe obstaculizar el pago de las mesadas, ya que se trata de derechos fundamentales e irrenunciables en el ámbito de la seguridad social. La gestión de estos derechos está guiada por el principio de eficiencia, lo que significa que los beneficios deben otorgarse de manera oportuna, según lo establecido en el artículo 2.º, literal a), de la Ley 100 de 1993.

Frente a ello, en sentencia SL1705-2023, se cita lo expuesto en la SL4320-2022, en la que se señaló:

*[...]Dicho en otras palabras, corresponde a la administradora adelantar, de manera inmediata, ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la solicitud de reconocimiento del subsidio estatal al que La Nación está obligada y, se reitera, la inminencia del actuar diligente de todas las administradoras de pensiones del sistema pensional ante las solicitudes de sus afiliados, cumpliendo los términos, estándares y procedimientos que la regulación les impone y, **ante el incumplimiento de los obligados en la conformación de la historia laboral, pago de aportes y demás obligaciones que surgen para el sistema, debe acudir a todos los medios y herramientas que el marco normativo les otorga para compeler (sic) al incumplido.***

Conforme a los supuestos mencionados, es importante destacar que, aunque la AFP sostiene al sustentar la alzada que no es procedente ordenar el pago del retroactivo pensional con cargo a sus propios recursos, argumentando que se requería la consolidación de la historia laboral y el posterior pago de las cuotas partes para iniciar el estudio de la garantía de pensión mínima, al no poderse otorgar de manera automática, teniendo certeza solo hasta el 2021 de los requisitos para su otorgamiento, además de la necesidad del aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no pudiéndose predicar negligencia en su actuación, **estos razonamientos no se consideran válidos, ni justificativos de la gestión oportuna a su cargo**, esto se debe a que:

- según se desprende de la sentencia de tutela del 25 de noviembre de 2019 emitida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Itagüí y de la respuesta proporcionada por Porvenir en tal actuación, la AFP tenía claridad de los tiempos a cargo del Municipio de Itagüí y de Colpensiones. A pesar de ello, justificó la falta de oportunidad en el procesamiento de la solicitud en que estas entidades reportaban de manera simultánea el período comprendido entre el 1º de marzo y el 30 de abril de 2000, cuando el ente territorial atendió todos los requerimientos del fondo. Esto llevó a

que la juez constitucional ordenara a Porvenir S.A. tomar todas las medidas necesarias para resolver de manera definitiva la prestación (pdf 3 página 56 a 65).

- A a pesar de las directrices judiciales, el 23 de enero de 2020, la AFP le exigió al interesado presentar una nueva reclamación frente al mismo asunto (pdf 3 página 67 a 68), por lo que fue necesario promover incidente de desacato, el 14 de octubre de 2020, para garantizar el cumplimiento de la sentencia (pdf 3 página 73), insistiendo la administradora, el 23 de del mismo mes, al verificar que acreditaba los supuestos para la concesión de la garantía de pensión mínima, en que radicara petición para darle trámite (pdf 3 pagina 74 a 76), lo que hizo el 9 de noviembre de dicha anualidad.
- También se tiene, según la información que reposa en el expediente, que el 19 de noviembre de 2018, Porvenir S.A. instó al Municipio de Itagüí para que expidiera el certificado de información laboral, el cual fue remitido el 22 del mismo mes y año. Además, el coordinador de bonos pensionales, el 06 de diciembre de 2019, informó al actor, en respuesta a la solicitud de Porvenir S.A. relacionada con el proceso de validación y reconstrucción de historia laboral, que instaban a Colpensiones incluir los ciclos reportados como faltantes (pdf 24 página 172).
- El 23 de enero de 2020 Porvenir le comunicó al señor Héctor que *"de acuerdo con la información suministrada por usted, hemos concluido el trámite de reconstrucción de su historia laboral y solicitaremos el reconocimiento y pago de su bono pensional"* (pdf 24 página 173), pidiéndole ese mismo día radicar formalmente petición de pago de la pensión (pdf 24 página 174 a 175), supuesto que fue acatado por el actor, a pesar de lo que se anunció en misiva del 09 de julio de 2020, así: Porvenir S.A., le hace saber lo siguiente: *"En esta oportunidad queremos informarle que para*



*continuar con su solicitud pensional, nos encontramos adelantando los trámites para que su historia laboral este correcta y completa; finalizado este proceso le informaremos el resultado y los pasos a seguir a mas tardar en 180 días” (pdf 24 página 176).*

- El 06 de diciembre de 2020, la Oficina de Bonos Pensionales le pidió al Ministerio de Defensa verificar las historias laborales, incluyendo la del actor (pdf 24 pagina 205 y siguientes). El 16 de marzo de 2021, Porvenir S.A., rogó a la Oficina de Bonos Pensionales la liquidación de los títulos y esta entidad respondió que no era posible, ya que el Ministerio de Defensa no había reconocido y pagado la obligación a su cargo.
- Ante la falta de diligencia en la gestión, el interesado radicó nueva acción de tutela, la cual fue resuelta el 24 de mayo de 2021 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itagüí, disponiendo que una vez la AFP recibiera el bono pensional, resolviera la situación pensional, en el término de 10 días (pdf 3 página 91 a 101), veredicto confirmado en providencia del 07 de julio de 2021, tras indicar el Ministerio de Defensa que, mediante acto administrativo 4922 del 17 de junio del mismo año, se dispuso el desembolso de la obligación correspondiente (pdf 3 páginas 104 y siguientes).
- El 03 de junio de 2021, el señor Héctor desplegó de nuevo reclamación de prestación, y Porvenir le respondió el 16 del mismo mes, que *“para agotar el estudio pensional no bastará la sola radicación de la documentación relacionada, sino que deberá finalizarse el proceso de reconocimiento y pago del bono pensional que tiene a su cargo la NACIÓN en calidad de emisor, como el MINISTERIO DE DEFENSA, el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES en calidad de contribuyentes.”* Aunque se advertía que el Ministerio de Defensa efectuó el pago, lo cierto es que no fueron notificados de ello, además el Municipio no ejecutó los trámites para actualizar la

marcación correspondiente (pdf 3, páginas 89 y siguientes). Solo hasta el 8 de octubre de 2021, Porvenir le avisó al demandante que le reconocería la garantía de pensión mínima, a partir de septiembre de esa anualidad (pdf 3, páginas 124 a 128).

De lo anterior surge con claridad la negligencia de la AFP en el trámite de las solicitudes elevadas por el afiliado, quien para el 2019, acreditaba tanto la edad como las semanas de cotización para beneficiarse del otorgamiento de la garantía de pensión mínima, ya que superaba los 62 años, al nacer el 11 de febrero de 1957, y contaba con más de 1.150 semanas; circunstancia que a su vez, generaba para la administradora de fondos de pensiones la obligación de dar trámite a la reclamación en los términos peticionados, en observancia de lo normado por los artículos 83 de la Ley 100 de 1993, y 20 y 21 del Decreto 656 de 1994 como se explicó en precedencia.

No obstante, forzó al afiliado a presentar en varias ocasiones documentación para darle curso a la pensión, viéndose de igual forma en la necesidad de instaurar acciones de tutela y desacatos para obtener respuesta y solo hasta 2021 la entidad procedió con el otorgamiento de la prestación, a pesar de que, desde antes de 2019, instó para que le brindaran información para la consolidación de su historia laboral. Se echa de menos la falta de acción por parte del fondo para que tanto el Municipio de Itagüí como Colpensiones corrigieran el error en la liquidación provisional del bono respectivo. Además, a pesar de que el Municipio reconoció el tiempo el 28 de julio de 2020, la entidad continuó anteponiendo trabas e inobservando lo establecido en el artículo 4 del Decreto 656 de 1994, *[e]n su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, están **obligadas** a prestar en forma eficiente, eficaz y **oportuna** todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los*

*perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados'. Además, tampoco consolidó la historia laboral desde el momento en que el señor Ortiz se afilió, lo cual ocurrió en el año 2000.*

Por otro lado, las inconsistencias en el bono pensional no pueden servir como excusa para el retardo en el reconocimiento de la pensión mínima del actor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 656 de 1994. Como se ha expuesto, las sociedades administradoras tienen la obligación de obtener y mantener actualizada y de manera oportuna el histórico laboral, de modo que estén en capacidad de determinar con precisión el momento en el cual cada uno sus afiliados cumple los requisitos para acceder a una pensión, sin que sea aceptable trasladarles esta carga, haciéndoles más gravosa la situación por causas que les resultan ajenas y que dependen únicamente de trámites interadministrativos entre los fondos y las entidades públicas o privadas.

Sobre el particular, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, en sentencia SL1534 de 2019, expuso:

*"El análisis sistemático que se realiza en precedencia, permite a la Sala hacer un llamado de atención a las AFP, a fin de que no coloquen trabas innecesarias en el reconocimiento de las pensiones de vejez de sus afiliados, pues si ellos arriban a los 57 años si son mujeres, o 62 si son hombres y cuentan con más de 1.150 semanas cotizadas o de tiempo de servicios, pero no reúnen el capital mínimo necesario para el financiamiento de su pensión mínima de vejez en los términos del artículo 64 de la Ley 100 de 1993, deben ser pensionados provisionalmente con cargo a los dineros que posean en su cuenta de ahorro individual, luego de lo cual, se constituye en un imperativo legal, que tales administradoras deben realizar las gestiones pertinentes para lograr la garantía de la pensión mínima contemplada por el aludido artículo 65 ibídem; ya que, se itera, si la administradora no cumple diligentemente tal obligación legal, como ya se explicó, debe asumir el pago de la pensión mínima de vejez con cargo a sus propios recursos, como lo señalan las normas trascritas en precedencia".*

Así las cosas, acertada resulta la decisión emitida en primera instancia, en tanto, al acreditar el señor Héctor el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas de cotización, es claro que el proceder de Porvenir S.A.

debió ceñirse a adelantar las actuaciones necesarias para la concesión de la garantía de pensión mínima reclamada, debiendo, entre tanto, pagar mesadas provisionales con cargo a los recursos de su cuenta de ahorro individual, e informarle a la Oficina de Bonos Pensionales la fecha en la cual se agotarían los mismos, a fin de que dicho ente Ministerial tomara as medidas tendientes a disponer las sumas necesarias para continuar con la cancelación de tal prestación, y como ello no sucedió, sino que por el contrario, la AFP de manera reiterativa e incongruente, sin la seriedad que amerita la evaluación de las reclamaciones, persistió en la negativa y siguió exigiendo la presentación de solicitudes, por lo que su falta a las obligaciones legales y a su deber de gestión oportuna, le acarrea la sanción de reconocer el derecho, con cargo a sus propios recursos.

De cara a la inconformidad relacionada con la condena a **intereses moratorios** del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es de indicar que, la misma tampoco tiene vocación de prosperidad, en tanto, dicha preceptiva indica de manera clara que se reconocerán *".. en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales..., la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado"*, y para el asunto objeto de estudio, **se reclamó y se condenó al pago de tales mesadas retroactivas**, afirmándose para liberarse de las mismas la actuación diligente por parte del fondo privado, que como ya se vio no logra acreditarse, luego, resulta **evidente la tardanza en la cancelación oportuna de la prestación otorgada**, lo que satisface la exigencia normativa para la prosperidad de tales intereses razón por la que se mantienen en la forma otorgada por la primera instancia.

Las **costas** en esta instancia corren a cargo de la **AFP Porvenir S.A.**, a quien se desata adversamente el recurso.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, dentro del proceso ordinario promovido por **Héctor Jaime Ortiz Cardona** en contra de la **AFP Porvenir S.A.**, donde fueron vinculados como listisconsortes necesarios por pasiva el **Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales- Ministerio de Defensa Nacional, Municipio de Itagüí y Colpensiones**.

Las **costas** en esta instancia corren a cargo de la **AFP Porvenir S.A.**, a quien se desata adversamente el recurso. Por agencias en derecho a favor del demandante se tarifa la suma de **\$2.320.000,00**.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**